

Declaración de organizaciones y movimientos de Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos de Argentina V Conferencia Regional de Población y Desarrollo

Nosotras, integrantes del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, denunciaremos los ataques y retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país. Reclamamos urgente atención a las restricciones gravísimas del derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales, así como a la manera absolutamente irresponsable con que el gobierno argentino acusa de terrorismo y golpe de Estado a quienes participaron de la última protesta social. Exigimos la inmediata libertad de las personas detenidas y acusadas de graves crímenes, y el esclarecimiento de las detenciones injustificadas.

En esta V Conferencia Regional de Población y Desarrollo, exhortamos a los Estados de la región a defender el Consenso de Montevideo, nuestra hoja de ruta regional para las políticas de población y desarrollo. Y exigimos al Estado argentino el respeto, protección y garantía de los derechos humanos porque sin Estado de derecho, sin libertades, sin garantías democráticas no es posible hablar de desarrollo.

En los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei se han desfinanciado, abandonado y atacado políticas de derechos humanos. Advertimos con honda preocupación que por primera vez desde el regreso de la democracia -hace más de cuatro décadas- una gestión de gobierno ignora, abandona y destruye los mecanismos tendientes a erradicar las violencias machistas y a garantizar la igualdad de oportunidades, estigmatizando toda política de género y feminista. La eliminación de programas de apoyo a víctimas de violencia de género y la falta de compromiso con el acceso a derechos comprometidos en acuerdos internacionales demuestran una clara negligencia hacia las necesidades y derechos de las mujeres y personas LGTBQA+.

El 6 de mayo se produjo un crimen de odio: murieron asesinadas tres mujeres por el hecho de ser lesbianas. Es deber del Estado garantizar que las personas LGTBQA+ puedan vivir libremente su identidad y su sexualidad sin ser víctimas de violencia y abstenerse de promover discursos que inciten al odio. Reclamamos justicia por las muertes de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante.

Los derechos sexuales y reproductivos han sufrido en estos escasos seis meses de gobierno un enorme retroceso. La reducción de fondos para programas de salud reproductiva y la imposición de restricciones al acceso a servicios de aborto seguro y gratuito son medidas que ponen en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres y personas gestantes. Mencionamos como ejemplos el desmantelamiento del Plan Enia (para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), una verdadera política de Estado que se reflejó en la disminución del embarazo adolescente de un modo significativo y demostró un enorme impacto en la vida y la salud de las adolescentes y niñas. Asimismo, las demoras y restricciones de distribución de insumos (como misoprostol, mifepristona y métodos de anticoncepción) y la ausencia de capacitaciones a profesionales de la salud que puedan garantizar el acceso a servicios de salud, como el aborto seguro.

Estas políticas regresivas no sólo ignoran el derecho fundamental a decidir sobre el propio cuerpo y perpetúan la desigualdad de género, dejando a las personas más vulnerables en una situación de desprotección alarmante, si no que son una afrenta a las instituciones democráticas y al Estado de derecho, porque se trata de derechos consagrados constitucionalmente.

A este contexto se suma la utilización, por parte del Presidente, de la discapacidad como insulto o burla, lo cual genera una estigmatización que afecta a las personas que viven con una discapacidad. El desmantelamiento del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el racismo (INADI), sumado a la estigmatización de quienes allí se desempeñaban para intervenir ante situaciones de discriminación y vulneración de derechos, contribuye a un mayor desamparo.

Los recortes definidos en el gobierno central tienen a su vez un impacto más profundo en las provincias, por la conformación federal del país. Así, advertimos brechas en el acceso a derechos, de acuerdo a las afinidades y oportunidades políticas de sus gobernadores y a la fragilidad o fortaleza de las economías provinciales.

Nos avergüenza la ausencia de representantes del gobierno argentino en este foro. Es otra clara muestra de su absoluto desprecio a sus compromisos internacionales y al respeto por las políticas de desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

No hay desarrollo posible sin un Estado que se haga cargo de los principios rectores de una sociedad. No hay desarrollo posible si no se despliegan políticas públicas que permitan el acceso a condiciones de igualdad. No hay desarrollo posible con una mirada política, desde el gobierno y el Estado que entienda que el ajuste fiscal y las privatizaciones suponen un beneficio colectivo. Con un país y un mundo para pocos no hay 2030 y no existe la posibilidad de desplegar una vida digna para todos.